



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE POSADAS

//la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, a los cinco días del mes de junio de 2025, se reúnen los señores Jueces de esta Cámara, Dres. Mario Osvaldo BOLDÚ, Mirta Delia TYDEN y Manuel Alberto Jesús Moreira , a fin de dictar sentencia en autos: ***“Expte. Nº FPO 1437 / 2021 CAI.- CAMINOS DEL PARANA SA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO ”*** en presencia de la Sra. Secretaria autorizante. Examinados los mismos y planteada la cuestión respecto a si es conforme a derecho el fallo recurrido, previo al intercambio de ideas que hacen a la esencia del Acuerdo, el Dr. Mario Osvaldo Boldú dijo:

1) Que, en razón de que los resultantes de la sentencia de fecha 27/08/2024 explican de manera correcta las cuestiones centrales objeto de este juicio, déselas aquí por reproducidas en honor a la brevedad.

2) Que, el Sr. Juez de 1ra. Instancia, en el fallo apelado, hizo lugar a la demanda planteada por Caminos del Paraná SA, contra la municipalidad de Santa Ana y, en consecuencia, declaró la inaplicabilidad del cobro en concepto de "Tasa de Registro, Inspección y Servicios de Contralor" a las estaciones de Peaje que concesiona la empresa actora.

Asimismo, condenó en costas a la demandada y reguló los honorarios profesionales de los representantes de la parte actora.

3) Que, en fecha 02/09/2024 la parte Demandada apeló la sentencia, lo que fuera concedido a fs. 152, ya fs. 255/262 expresa sus agravios en los siguientes términos:

A.- En su primer agravio, la recurrente afirma que los fundamentos en los cuales se basó el *A quo* para argumentar su sentencia fueron erróneos y no aplica la ley vigente. Toda vez que la obligación de pago de tasa, tiene su origen en disposiciones legales vigentes que no han sido impugnadas en sede administrativa, ni declarada su invalidez en estos autos.

En este sentido, la demandada manifiesta que la única forma en que la actora podría evitar el cumplimiento de la obligación es atacando la validez de la norma.

Menciona, por otro lado, que fue la propia actora la que se presentó voluntariamente ante el municipio a solicitar la aplicación de las normas

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016

mencionadas para obtener el carácter de contribuyente, presentando mensualmente las declaraciones pertinentes y el pago de la tasa hasta que dejó de hacerlo sin siquiera impugnar o recurrir por la vía administrativa ni solicitar su baja, hecho este último que genera un dispendio administrativo municipal por el hecho de estar habilitado a realizar su actividad económica percibiendo beneficios. Ello debido a que el contrato de concesión le exige a la empresa concesionaria estar habilitada en el municipio donde tenga las estaciones de peaje.

Asimismo, ataca los argumentos de la Sentencia que refieren a la falta de prueba de prestación de servicio de inspección efectivo, por parte de la Municipalidad, que justificara el pago de la tasa; y por otro lado, y que el pago de la tasa pueda alterar la ecuación económica financiera de la empresa, lo cual manifiesta que tampoco ha sido debidamente acreditado.

Respecto a esto último, beneficiar a la empresa eximiéndola del pago de las tasas, implicaría un enriquecimiento sin causa, en perjuicio de la comunidad.

Expresa que el propio contrato de concesión dispone que la tarifa establecida incluirá la incidencia de la totalidad de los impuestos, contribuciones y tasas vigentes, con excepción del IVA (Impuesto al Valor Agregado). Asimismo, que la concesionaria se encuentra sometida a toda legislación tributaria vigente en el plazo de concesión y deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás trámites exigidos por los entes nacionales, provinciales o municipales o empresas prestatarias de servicios públicos y abonar los impuestos, tasas y contribuciones, aranceles y/o tarifas Y, por otro lado, también surge del contrato la obligación de cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas y reglamentos vigentes en el lugar.

Es decir que, según la recurrente, la Actora pretende obtener un beneficio para eludir el pago de tasas que surgen de normas que la propia empresa consintió al suscribir el contrato y al solicitar su habilitación municipal.

En otro orden de cosas, y dentro del mismo agravio, la recurrente menciona que la sentencia yerra al excluir a las concesionarias asentadas en rutas nacionales de la competencia de los municipios, y del pago de tributos.

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE POSADAS

B.- En su segundo agravio, la recurrente manifiesta que el *A quo* incluye en su Sentencia cuestiones que no fueron incorporadas al expediente, toda vez que la actora circunscribe su reclamo a un período determinado de tiempo, y el Juez declara la improcedencia del cobro de tasas sin indicar a qué períodos refiere, en forma indeterminada beneficiando nuevamente a la actora sobre algo que no fuera solicitado; violando el principio de congruencia.

C.- En su tercer agravio, la recurrente se queja del punto 2 del resolutorio que declara la condena en costas en su contra

D.- Finalmente, recurre la negativa a regular honorarios de los representantes de la demandada, en virtud de lo regulado por la ley 27423.

4) Ordenado el traslado de los agravios reseñados *supra*, la parte Actora contesta (fs. 264/266) mencionando, en forma general, que los argumentos formulados por la recurrente serían reiterativos e insuficientes para desvirtuar lo decidido por el Juez. Y, en particular que, la vigencia de una norma debe supeditarse también en función del marco constitucional que determina en definitiva su aplicabilidad.

Por otro lado, manifiesta la Actora que resulta irrelevante el agravio que sostiene que debió impugnarse la norma en sede administrativa y/o declararse inválida o inconstitucional o ilegal, ya que lo que determina la sentencia, es que no le resulta aplicable a la propia Actora y que tal extremo puede ser declarado en la Cámara revisora.

Manifiesta que el hecho de haber abonado períodos previos no implica en modo alguno un obstáculo para cuestionar la pretensión con posterioridad. Y que además no obtuvo beneficio alguno, no pudiendo la Demandada demostrar la prestación de ningún servicio vinculado con registro, inspección y servicios de contralor.

Contra el tramo del agravio que refiere a la ecuación económica financiera, dice la actora que la misma surge del dictamen e intervención del OCCOVI que refiere a cómo este tipo de pretensión la altera.

Y manifiesta que la CSJN se expresó en el mismo sentido que la sentencia aquí apelada, en circunstancias análogas. Y que no sólo no se trata de una instalación comercial, sino que además la tasa que se le quiere cobrar no tiene

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016

se replica en una contraprestación o servicio, sino que surge de una alícuota de la declaración mensual que la empresa realiza ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones.

En cuanto al segundo agravio, dice la actora en contestación, que el hecho de que el juez haya declarado la inaplicabilidad a Caminos del Paraná SA la tasa objeto del presente sin limitarse al período solicitado en demanda, se justifica en que, al haber finalizado la concesión, la empresa ya no es la concesionaria. Por lo que sólo esta empresa resulta la beneficiada por el fallo y no la nueva concesionaria.

Respecto a las costas, al no existir argumentos que justifiquen la imposición de costas en un sentido distinto al declarado en la sentencia, debe confirmarse.

Y en cuanto a la regulación de los honorarios de los representantes de la Demandada, manifiesta que no le consta la situación contractual que mantienen con el municipio demandado.

5) Antes de ingresar al tratamiento de los agravios reseñados, es importante destacar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan solo aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido^[1].

Aclarado ello, en cuanto a las cuestiones procesales que traídas a debate, la acción planteada en primer término, es decir la acción declarativa de certeza, prevista en el art 322 del CPCCN, persigue el cese de situaciones jurídicas que importan estados de incertidumbre o inseguridad jurídica, esclareciendo su existencia, alcance o modalidad y que producen una lesión o perjuicio en el reclamante. Y con la finalidad de declarar la existencia de un derecho del Actor o la inexistencia de un derecho del Demandado.

La acción declarativa de inconstitucionalidad planteada en forma subsidiaria, en cambio, de creación pretoriana, se funda en el principio de

1.

C.S.J.N, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301 :970; esta Sala, Cau: 30445/2014, “Agropecuaria Huinca SRL c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo c organismo externo”, sentencia del 2/09/2014 y sus citas, entre otras).

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE POSADAS

tutela judicial efectiva y viene a reforzar el principio de separación de poderes facultando al Poder Judicial de una herramienta de control constitucional respecto de los demás Poderes Estatales, en los casos concretos sometidos a su juzgamiento y sin que ello importe alterar el principio de validez de los actos administrativos o legislativos^[2].

En cuanto a sus requisitos, la acción declarativa de certeza se exige: a) un estado de incertidumbre acerca de la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica; b) que la falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al demandante; c) que no exista otro medio legal para poner fin en lo inmediato a la incertidumbre^[3].

De esto se desprende que, en cuanto a su naturaleza, la acción meramente declarativa, prevista en el art. 322 del CPCCN, se caracteriza por su naturaleza excepcional. Es decir que, la propia norma condiciona su viabilidad a los casos en que no exista otra acción judicial que resulte más apropiada para desarticular la incertidumbre jurídica que provocan las circunstancias de hecho.

Por lo tanto, para que proceda formalmente esta acción deben acreditarse los presupuestos legales y jurisprudenciales, y ante la ausencia de alguno de estos, corresponde su rechazo^[4].

En este marco la Sentencia de 1ra Instancia, al tratar los requisitos de admisibilidad, analiza la presencia concreta de un estado de incertidumbre respecto a la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, y en el perjuicio que ello podría producir en el demandante, puntos en los que coincide con el fallo apelado, a lo que debe agregarse un tercer requisito legal

2.

Cassagne, Juan Carlos, "La Acción Declarativa de Inconstitucionalidad", La Ley 06/07/2015, 1- L LEY2015-D, 589.

3.

Gelli, María A., Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, Ed. La Ley Buenos Aires, 2008, T. II, pág. 533

4.

CSJN, "Ehegaray, Ricardo D. c/ Carrio, Elisa s/ Acción Declarativa (art. 322 Código Procesal 08/07/2020

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016

que imprime la norma, y que refiere a aquel carácter excepcional que he mencionado anteriormente, enmarcadas en cuestiones referidas en el recurso planteado.

Así, si bien es cierto que la inscripción y pedido de habilitación, oportunamente solicitada por la actora, constituyen conductas deliberadas, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces no implica por sí mismo la validez o la legitimidad de un tributo respecto del contribuyente en cuestión, sea por razones jurídicamente materiales o personales. De allí la existencia de recursos procesales en materia tributaria que persiguen la declaración judicial de nulidad, inconstitucionalidad o repetición, por nombrar sólo algunos.

Asimismo, en referencia a otro extremo expuesto en carácter de agravio, si bien es cierto el argumento de que la empresa ya no desempeñaba el carácter de concesionaria del Corredor Vial N°6, igualmente cierto es que se encontraba en etapa de ejecución fiscal al momento del inicio de la presente demanda, por lo que mantiene su legitimación para accionar pese a la situación de hecho que refiere a la pérdida de la concesión mencionada.

Estos antecedentes resultan de sustancial importancia en miras al examen de admisibilidad de la acción, argumento que fuera utilizado en forma recurrente por la demandada, habida cuenta que su carácter de excepcional condiciona su viabilidad a la inexistencia de otra vía legal para hacer cesar la incertidumbre^[5], quedando vedada asimismo la indagación meramente especulativa o consultiva^[6], que amerita su debate en el marco de la existencia de un perjuicio actual o en ciernes.

En cuanto a esto último, el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica debe ser concreta al momento de sentenciar^[7], ya que la acción declarativa no es un proceso de revisión, no juzga hechos pasados, sino que declara el alcance de una relación

5.

Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Tomo I, Tercera Edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 323

6.

CSJN, Fallos:327:1108, considerando 2º, Fallos: 340:1480, entre muchos otros.

7. Fallos: 310:606; 311:421; 331:400, entre otros

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE POSADAS

jurídica puesta en consulta, o refiere a la legalidad y/o ejercicio de derecho relevantes al momento de la Sentencia, para no devenir en abstractas^[8].

Así es que, la sentencia que recaiga en estos autos respecto del fondo de la cuestión traída a debate, atento a la existencia de un reclamo ejecutorio en proceso, tendría la autoridad de determinar la legitimidad del contenido del título reclamado por la vía ejecutiva, por lo que no resulta necesaria la vigencia de la concesión vial toda vez que en el caso se mantienen vigentes las consecuencias de la relación jurídica pasada.

Por lo tanto, en términos procesales, puede concluirse que la presentación bajo examen cumplimenta los requisitos de procedencia legales y jurisprudenciales, y por lo tanto se presenta como adecuada en virtud de las pretensiones reclamadas en autos dado que persigue poner fin a un estado de incertidumbre respecto de la exigencia de un tributo, cuestionando su capacidad como sujeto pasivo, y por lo tanto su obligación de pago.

6) Ya resueltas las cuestiones que refieren a la viabilidad procesal de la acción, corresponde ahora referirme a la cuestión de fondo. En este sentido, en primer lugar hay que mencionar que, como consecuencia lógica del ejercicio de la autonomía política, administrativa y financiera prevista en el art. 161 de la Constitución de la Provincia de Misiones, se les reconoce a los municipios la competencia tributaria, es decir la facultad legítima del ente de crear y exigir prestaciones patrimoniales obligatorias fijadas por normas legítimamente sancionadas que se imponen a las personas humanas o jurídicas enmarcadas en supuestos de hecho que la propia norma fija, y siempre que tal conducta tributaria no colisione con los límites constitucionales, ni con los principios propios del derecho tributario, ni con los criterios de razonabilidad en el marco del concepto de confiscatoriedad^[9], en especial cuando todo ello fuere en detrimento del derecho de propiedad de los contribuyentes.

8.

Gozáini, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo I pág. 318, 3ra Ed.

9.

Fallos: 314:1293; 322:3255; 328:4542; 332:1571; 341:581; 343:720; 344:1458; 345:1184

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016

Luego, los tributos han sido tradicionalmente clasificados en tres especies: impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto grava una manifestación de capacidad contributiva que no precisa ser acompañada de una contraprestación específica por parte del Estado.

La tasa y la contribución, en cambio, tienen como hecho generador una prestación concreta de un servicio o actividad estatal específica que beneficia al contribuyente, siendo incompatible su percepción simplemente como consecuencia del ejercicio de una actividad generadora de ingresos brutos, lo que representaría el ocultamiento de un impuesto que gravaría doblemente la actividad desplegada por el contribuyente.

En referencia la norma cuestionada -Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor previsto en el art. 152 del Código Fiscal Municipal-, no se encuentra en autos debatida su vigencia, sino cuestionado su alcance y aplicación a una empresa concesionaria de estación de peaje de una ruta nacional, mediante la acción declarativa de certeza y, en subsidio, su validez mediante la acción declarativa de inconstitucionalidad (Punto VII del escrito de demanda). Es decir que lo que aquí se debate es si el Municipio cuenta con facultades suficientes para realizar las inspecciones, registrar y controlar la actividad en los mismos términos que puede hacerlo con un comercio emplazado dentro de los límites de su territorio.

En este sentido, las facultades municipales derivadas de las constituciones locales pueden en algunos casos colisionar con las atribuciones que las provincias le delegaron al Estado Nacional cuando, en el marco del ejercicio de sus funciones, los municipios interfieran con la prestación de los servicios que se derivan del ejercicio regular de aquellas facultades delegadas.

Si bien es cierto que la Firma Actora no forma parte del Estado Nacional, sino que se trata de una entidad de carácter privado, la realidad es que presta un servicio estatal bajo las condiciones impuestas por el Estado Nacional, es decir que estos establecimientos de utilidad nacional se presentan como una herramienta que el propio Estado utiliza para llevar a cabo servicios en miras a lograr una mayor eficiencia prestacional. Por lo que, si bien sus instalaciones pueden quedar sujetas al cumplimiento de ciertas obligaciones impuestas por las Provincias o Municipios en los que se encuentran emplazadas,

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE POSADAS

ello no puede implicar una doble imposición generando desconciertos normativos de cualquier índole, ya que la prestación del servicio podría verse afectada en muchos sentidos (prestacionales, materiales, económicos, etc.).

La jurisdicción nacional de los corredores viales interprovinciales tiene su razón de ser en la gestión centralizada en el Estado Nacional, bajo el argumento -coherente- de impedir que los corredores se vean obstaculizados por las gestiones locales^[10], provocando así una potencial amenaza a las garantías constitucionales previstas en el art. 14 de la CN. Por lo tanto, estos establecimientos de utilidad nacional, aunque sean de gestión privada mediante contratos de concesión de obra pública, no pueden ser alcanzados por pretensiones de naturaleza tributaria en forma indiscriminada dado ello afectaría la ecuación económico-financiera de la empresa concesionaria, lo que derivaría en una alteración de los costos de las tarifas de peaje como consecuencia del efecto de traslación de los tributos, afectando además intereses federales y colisionando con lo previsto en el art. 75, inc. 30 de la CN.

Asimismo, las concesiones de los corredores viales nacionales cuentan con su propio organismo de control, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Economía, por lo que la Municipalidad de Santa Ana carece de la potestad necesaria para ejercer controles sobre las estaciones de peaje, en la medida en que éstas no excedan del normal ejercicio de sus funciones y condiciones de explotación, y que ello además afecte intereses municipales.

Por lo expuesto, considero corresponde confirmar la sentencia atacada.

7) Que, respecto al agravio ataca el punto 4 de la parte resolutive de la Sentencia, y que refiere a la omisión de regular los honorarios de los profesionales representantes de la parte demandada en virtud de lo previsto por

10.

Los caminos interprovinciales, destinados a promover y facilitar la circulación de personas y productos en todo el territorio del país, constituyen instrumentos del gobierno federal, y en consecuencia, el hecho mismo de su construcción no debe ser obstaculizado por el ejercicio de los poderes reservados a los gobiernos locales (CSJN "Operadora de Estaciones de Servicio S.A. (OPESSA) y otro c/ Municipalidad de Escobar s/ amparo" (02/04/1998).

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016

el art. 2 de la Ley 27423, considero que le asiste razón a la recurrente dado que conforme luce en los Instrumentos Notariales obrantes a fs. 34/36 y 84/88, los Dres. Iván F. Lambert Navarro y Manuel Fernando Bilisky fueron facultados para intervenir en las causas que intervenga la firma actora. Sin embargo, no se aprecia en estos autos que la representación de estos profesionales sea ejercida en forma permanente, por lo que no se percibe en forma alguna que sean alcanzados por la norma de referencia. Por lo tanto, corresponde se le regulen honorarios, y a tal fin vuelvan las presentes actuaciones al Juzgado de grado.

8) Que, en referencia alas costas del proceso, y dado el resultado alcanzado, corresponde confirmar la condena en costas prevista en la Sentencia y, conforme el principio objetivo de la derrota, corresponde aplicar lo propio respecto a las costas de la presente Instancia, sin que lo resuelto en el punto 7) sea suficiente para alterar lo mentado en la primera parte del art 68 del CPCCN, por lo que también deberán ser soportadas por la Demandada.

9) Por lo expuesto y con base en los fundamentos que preceden, **voto por rechazar el recurso planteado y en consecuencia confirmar la Sentencia Apelada excepto respecto de lo referido en el punto 7) del presente. Costas de ambas instancias a la Demandada (Art. 68 del CPCCN). ASÍ VOTO.**

Las Dras. Mirta Delia Tyden y Manuel Alberto Jesús Moreira adhieren al voto anterior. Con lo que finalizó el Acuerdo, firmando los Sres. Vocales ante mí, doy fe.-

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016



Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE POSADAS

//sadas, junio 05 de 2025 .

Y VISTAS:

Por ello, y con base en los fundamentos del Acuerdo que preceden, RECHÁCESE el recurso planteado por la parte Demandada, en consecuencia CONFÍRMESE la Sentencia apelada, excepto respecto de lo referido en el punto 7) del presente, costas de ambas Instancias a la parte Actora (Art. 68 del CPCCN) .

Notifíquese. Publíquese en la forma dispuesta en la Acordada 15/2013 de la CSJN. Devuélvase.-

Fecha de firma: 05/06/2025

Firmado por: MANUEL ALBERTO JESUS MOREIRA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIRTA DELIA TYDEN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: DRA. VERÓNICA SUSANA ZAPATA ICART, Secretaria Civil de Cámara



#35470798#443054184#20250605094646016



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS

Expte.: 1437/2021

Posadas, Misiones.

Y VISTOS los autos caratulados “Expte. FPO 1437/2021 Caminos del Paraná S.A. C/ Municipalidad de Santa Ana s/ Acción meramente declarativa de derecho”, traídos a despacho para dictar sentencia:

RESULTANDO:

1) Que a fs. 05/25 se presentó la firma “Caminos del Paraná S.A.” e interpuso acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del CPCCN contra la Municipalidad de Santa Ana, a fin de que se declaren inaplicables e inconstitucionales las Ordenanzas impositivas anuales de los períodos comprendidos entre los meses 01 /2015 al 04/2020, que fijan la imposición de pago de Tasas Retributivas de Servicios prevista en el Código que Fiscal Municipal, Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor a “Estaciones de Peaje”.

Dentro de ese marco, sostuvo que es concesionaria -vía Licitación Pública Nacional- del Corredor Vial N° 6, licencia otorgada en miras de construcción, mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración y explotación de las Rutas Nacionales N° 12 y 16; pretendiendo gravar concretamente los movimientos de la estación ubicada en el km. 1.375 de la Ruta Nacional 12 situada en el Municipio.

Manifiesta que la pretensión tributaria municipal, colisiona con la Ley Nacional 17.520- de rango superior- que exige mantener inalterable la ecuación- económica financiera de las concesiones y defiende que de aprobarse el cobro de los tributos pretendidos, existiría indefectiblemente una intromisión en la concreción de los fines del interés Nacional.



#35470798#421580776#20240827074639009

Por tanto, el cobro de las tarifas locales, implicaría que tales costos se trasladen a las tarifas del peaje y por ende, habría modificaciones negativas en el Presupuesto Nacional, para así trasladarse finalmente al bolsillo de los usuarios que transiten por dicha cabina de peaje.

Denunció la existencia de un embargo trabado en la cuenta existente en el Banco “Mariva S.A” y manifestó el desconocimiento de los motivos de tal medida. Por su parte, la entidad bancaria informó que la medida fue ordenada en la causa “Expte. 67241/2020 Municipalidad de Santa Ana c/ Caminos del Paraná S.A. s/ Ejecución fiscal” tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 6 de Posadas.

Seguidamente, manifestó la existencia de dos actas labradas por la Dirección de Comercio Interior de la Provincia de Misiones, donde se le atribuyeron una serie de incumplimientos derivados de la falta de habilitación comercial. Ante tal situación, efectuó descargo, rechazando cualquier pretensión local de habilitación e intimó a abstenerse de continuar con todo trámite y/o exigencia relacionada con la habilitación comercial; descargo que no fue contestado.

-En ese sentido, alegó la inexistencia de un comercio concebido como tal, puesto que la cabina de peaje no configura un local destinado a la venta de servicios o productos, sino más bien constituyen “establecimientos de utilidad nacional”.

Añadió que la explotación de la concesión y las relaciones con los usuarios de las rutas concesionadas tienen un régimen jurídico propio, normas y órganos de control específicos y que por tanto, no existe en la cabina de peaje actividad destinada a la comercialización de productos o servicios entendidos en sentido estricto, que motiven una “habilitación comercial”. Y que la falta de prestación efectiva de servicios por parte del Municipio- presupuesto esencial para el cobro del tributo pretendido- deviene en la naturaleza exclusivamente recaudatoria de la tasa por parte de la Municipalidad.





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS**

Finalmente, sostuvo que la jurisdicción es Nacional con el fin de evitar un estorbo en la comunicación interprovincial, situación que se da cuando se admite un control local que modifica y altera la ecuación económico-financiera; lo que repercute en el precio final que ha de cobrarse a quienes se trasladen por dichos caminos.

Formula otras consideraciones en el mismo sentido.

Funda su derecho, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.

2) A fs. 27/29 la Fiscalía dictamina de forma favorable respecto a la competencia y admisibilidad de la presente causa a este Juzgado, de conformidad a lo previsto en el artículo 322 del CPCCN.

3) Corrido traslado, a fs. 37/77 contestó la Municipalidad de Santa Ana y solicitó su rechazo con costas.

Argumentó que no existe estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y extensión de los tributos que Camino Paraná S.A. adeuda a la Municipalidad de Santa Ana y por ende, no corresponde la acción declarativa de certeza.

Acompañó constancia de Habilitación Comercial de la firma, que fuera solicitada por la actora oportunamente en el año 2010, a fin de ser inscripta como contribuyente. Asimismo, agregó que luego de la habilitación, la actora presentó mensualmente las declaraciones juradas pertinentes, liquidó y abono voluntariamente el Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Contralor - anteriormente denominada tasa de Comercio e Industria-, en las oficinas de la Municipalidad, todo ello en concepto de la actividad comercial que la misma sociedad declaró realizar y por las cual solicitó y obtuvo la correspondiente habilitación.

Posteriormente, relató que dado el intempestivo cese de pagos y pese a las intimaciones; en fecha 16/07/2020 inició las acciones judiciales tendientes al cobro por vía de apremio “Expte. N° 67241/2020 Municipalidad de Santa Ana c/ Caminos del



#35470798#421580776#20240827074639009

Paraná S.A. s/ Ejecución fiscal”, tramitados por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Misiones, librando los oficios correspondientes al Banco Central de la República y a la Dirección Nacional del Registro Automotor a fin proceder a la traba del embargo.

Seguidamente, en fecha 15/07/2021, fue notificada de la presente demanda por la cual se ordenó la suspensión del embargo trabado y la solicitud de medidas cautelares.

Funda su derecho, ofrece pruebas y hace reserva del caso federal.

4) Corrido traslado, a fs. 81 la actora contestó e impugnó la documental acompañada y las pruebas ofrecidas por la contraria.

5) En fecha 10 de mayo del 2.022, se realizó la audiencia prevista por el artículo 360 del CPCCN, donde se fijó el hecho controvertido y se abrió la causa a pruebas; etapa que se desarrolló a fs. 92/ 113.

6) A fs. 114 se clausuró el período probatorio, mientras que a fs. 115/118 y 119 /126 se produjeron los alegatos de la Municipalidad de Santa Ana y de la actora, respectivamente.

7) Finalmente, como medida para mejor proveer, a fs. 130 se solicitó a la Municipalidad de Santa Ana copias del Código Fiscal Municipal referenciado y las Ordenanzas tributarias, instrumentos que fueron acompañados y agregados a fs. 131 /249 para el dictado de la presente.

CONSIDERANDO:

1) En virtud de lo expuesto, el punto controvertido aquí, reside en determinar si corresponde o no la aplicación de la tasa en concepto de “Derechos de Inspección,





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS

Registro y Servicio de Contralor”, respecto de las actividades llevadas a cabo por la estación de peaje ubicada en el km. 1.375 de la Ruta Nacional 12 perteneciente a “Caminos del Paraná S.A.”, en su carácter de concesionaria del corredor vial N° 6 .

A modo preliminar, corresponde señalar que la acción declarativa de certeza, siguiendo lo previsto por el artículo 322 del CPCCN, se sustenta en tres elementos esenciales: I-que exista un estado de incertidumbre respecto de la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, II- que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio al demandante y III- que no exista otro medio legal idóneo para hacer cesar esa situación. (Cfr. Gelli, María A., Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, T. II, pág. 533).

En consecuencia, la acción declarativa tiene como objeto principal la obtención de un pronunciamiento judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre, el cual produciría, en lo concreto del caso, un perjuicio netamente de índole económica a Caminos del Paraná S.A.

Desde esta perspectiva, la vía resulta adecuada conforme a lo enunciado por la actora en su pretensión inicial, dado que se dirige a hacer cesar la exigencia que pesa sobre su parte en relación al pago de una tasa municipal que estima no ser procedente.

En el presente caso, existe entonces estado de incertidumbre acerca de las obligaciones de la actora para con el Organismo fiscal Municipal respecto de la validez o no de la aplicación del Código Tributario Fiscal y sus respectivas Ordenanzas anuales, las cuales imponen el pago de una tasa por *Derecho de Inspección, Registro y Servicios de contralor*.

2) Con respecto al fondo del asunto, es necesario recordar que la CSJN ha dicho en repetidas oportunidades que “los jueces no están obligados a expedirse sobre todos los argumentos expuestos por las partes, sino sólo respecto de aquellos que fueren conducentes para fundar sus conclusiones y resultan decisivos para la solución de la



controversia” (CSJN Fallos: 307:2216; 320: 2278; 322:270, entre otros). Y en este sentido, es necesario retrotraernos específicamente a la norma que da origen a la presente contienda.

Por una parte, el Código Fiscal de la Municipalidad de Santa Ana, cuerpo legal que fue acompañado por la demandada oportunamente, en su *Título II- Parte Especial “Derecho de Inspección, Registro y Servicios de contralor”* establece en el art. 101: *“Hecho imponible: los contribuyentes o responsables de las actividades que contempla este capítulo, ejercidas o instaladas en la Jurisdicción de la Municipalidad de Santa Ana, que realicen sus actividades en forma permanente o temporaria, continua o discontinua, tenga o no local, esté o no inscriptas en la Municipalidad, se encuentre o no en terreno privado; quedan sometidas a las normas del presente Código...”*.

Además, el citado artículo dispone, que están alcanzadas por los gravámenes que la Ordenanza impositiva establezca, todas las actividades comerciales, industriales, profesionales, de servicios, locaciones obras y toda otra acción realizada a título oneroso.

Por otra parte, las Ordenanzas impositivas acompañadas por la demandada, vigentes en los períodos reclamados (2.015- 2.020) estipula los montos a aplicarse en concepto de *tasas por Inspección* específicamente a las *“cabinas o estación de peajes”*, monto que fue variando con el correr de los años y que derivó en la liquidación y pago de las mismas por parte de la actora hasta el momento indicado de cese.

Dicho esto, es preciso señalar en primer término, que las tasas hacen referencia a un tributo pagado en contraprestación de un servicio o actividad prestada por el Estado. Las mismas representan una categoría tributaria derivada del poder de Imperio del Estado, que si bien tienen una estructura análoga a la de los impuestos, la esencial diferencia radica en que se está ante el desarrollo de una actividad estatal- en el caso





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS

concreto de carácter municipal- que desde el momento en que es lleva a cabo y el Estado lo pone a disposición del particular, este último no puede rehusarse a su pago, aun cuando el desarrollo de la actividad no le signifique un beneficio particularmente o no tenga interés en el, ya que el servicio prestado tiene en mira el interés general (CSJN Fallos 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770, entre otros).

Cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente académica, sino que además desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades tributarias entre los diferentes niveles del gobierno.

La CSJN fue tajante al sentenciar que es un requisito indispensable a la hora de conminar una tasa la existencia de servicios efectivamente prestados. Así, el cobro de las tasas ha de responder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos 335:1987, 344:2728, 332:1503)

Tiene dicho la Corte en el caso [“Quilpe S.A. s/ inconstitucionalidad”](#) que *“La efectiva prestación de un servicio individualizado en el contribuyente es un elemento esencial para justificar la validez de la imposición de una tasada, por lo cual es un punto que debe ser debidamente esclarecido para la adecuada decisión del pleito”*.

3) Ahora bien, la cuestión deriva en dilucidar cuáles son aquellos servicios que la demandada efectivamente prestó y por lo que pretende el cobro de la “Tasa Derecho de Inspección, Registro y Servicios de contralor”; servicios o actividades que no son ni más ni menos, que los estipulados en el referido artículo 101 del Código Fiscal de la Municipalidad de Santa Ana que la demandada ha acompañado, tales como: Higiene, seguridad, control de moralidad pública, control y preservación del medioambiente, ordenamiento y control del tránsito, etc.

En virtud de la teoría de la carga dinámica de la prueba, tiene el deber de probar quien está en mejores condiciones de hacerlo. En el presente caso, es el Municipio



quien posee la aptitud probatoria y los medios necesarios para reunir y presentar las pruebas que sustenten su postura, específicamente en lo que atañe a la prestación efectiva del servicio que funda el cobro de la tasa que se impugna.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la distribución de la carga probatoria debe ser dinámica y flexible. Así, en los fallos "[Siri, Ángel S. c. Gobierno de la Nación](#)" (1957) y "[Halabi, Ernesto c. P.E.N.](#)" (2009), se estableció que en circunstancias donde el Estado detenta mayor acceso a la información o a los recursos probatorios, es éste quien debe asumir la carga de probar los hechos controvertidos.

Sin embargo, la documental acompañada, no pudo evidenciar la existencia de servicios efectivamente prestados, más bien, la demandada se limitó a acompañar comprobantes y facturas que solo que dejan constancia de liquidaciones y pagos de la tasa; más no pudo acreditar que el servicio que funda la tasa en cuestión haya sido efectivamente prestado a la actora.

Consecuentemente, la ecuación es sencilla, sin servicios efectivamente prestados por parte de la Municipalidad de Santa Ana, no existen fundamentos que justifiquen el cobro de la tasa bajo análisis.

4) Siguiendo el análisis del art. 101 del Código Fiscal de la Municipalidad de Santa Ana, la norma hace referencia que quedan sometidos a las disposiciones del Código Fiscal y están, por ende, sujetos a la aplicación de tasa de inspección “*los contribuyentes o responsables cuyas actividades se llevan a cabo en la jurisdicción de la Municipalidad de Santa Ana*”.

De allí que, el segundo tema a tratar, radica en esclarecer si la cabina de peaje forma parte de la jurisdicción del Municipio o no.





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS**

Para el caso, es fundamental poner en resalto que el diseño de nuestro Sistema Federal reconoce constitucionalmente, la preexistencia de las provincias y la reserva de todos los poderes que estas no hubiesen expresamente delegado en el gobierno central, a la vez que exige aplicar estrictamente la preeminencia de los poderes en las áreas en que la Constitución Nacional así lo establecido.

En tal inteligencia, la CSJN ha sostenido que “los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación son definido y expresos; pero aquellos poderes provinciales no pueden enervar el ejercicio razonable de los poderes delegados al gobierno federal, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan todas las provincias” (CSJN Fallos 304: 1186 y 312:1437)

Por esa razón, resulta de esencial importancia que la relación entre las Provincias y la Nación se desenvuelva armónicamente, cuidándose una de no entorpecer la acción exclusiva de las otra y viceversa (CSJN Fallo 3332:66).

La Constitución Nacional prevé en su artículo 75 las atribuciones del Congreso de la Nación, así el inc. 18 le otorga la responsabilidad de adoptar las medidas para la prosperidad y bienestar del país, lo que incluye, sin lugar a dudas infraestructura vial como componente para el desarrollo económico, comunicacional y de tránsito interjurisdiccional.

La denominada “Cláusula del progreso” prevista en el artículo 75 inc. 18 , sostiene que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y en ese marco, tiene la potestad de otorgar concesiones temporales.



#35470798#421580776#20240827074639009

Por su parte, las leyes de Vialidad Nacional (N° 11.658, 12.625, 13.504), proclaman y reafirman a las rutas y caminos nacionales como de competencia exclusiva de la Nación. Es el art. 27 del [Decreto/Ley nro. 505/58](#), ratificado por la ley 14467, el que estableció que “Los caminos nacionales, así como los ensanches y obras anexas a lo mismo, serán de propiedad exclusiva de la Nación (...)”..

Por ello, el Estado Nacional, en carácter de administrador de los caminos y rutas nacionales, otorgó como está dicho, la concesión -vía Licitación Pública Nacional-, a la actora. De allí que, la explotación de la concesión y las relaciones que surgen de ella, entre el Estado, el concesionario y los usuarios; está regulada por un régimen normativo propio y específico de carácter federal.

Criterio adoptado por la CSJN en la causa “[OPESSA SA c. Municipalidad de Escobar s. Amparo](#)”, donde señaló que la cuestión de un camino nacional en jurisdicción provincial, debe examinarse sobre la base de los incisos 13,14 y 18 del art. 75 de la Constitución Nacional .

Es así que, sostuvo en la causa de referencia que “los caminos interprovinciales, destinados a promover y facilitar la circulación de personas y productos en todo el territorio del país, constituyen instrumentos del gobierno federal, y en consecuencia, que el hecho mismo de su construcción no debe ser obstaculizado por el ejercicio del poderes reservados a los gobiernos locales. Se trata, en definitiva, de la realización de obras en beneficio común, conducentes al adelanto y bienestar de todas las provincias, ejecutada de conformidad con lo que prescribe el art. 67 inciso 16 - actual 75 inciso 18 - de la Constitución Nacional” (CSJN Fallo: 283:251).

En ese orden de ideas, admitir el cobro de la tasa bajó análisis sobre la cabina de peaje, inevitablemente afectaría la tarifa por el uso de la Ruta Nacional 12 - Corredor Vial N° 6, ya que "la pretensión fiscal de la demandada conlleva una intromisión en la ecuación económico-financiera del contrato administrativo de





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS**

concesión de un servicio público federal celebrado entre el Estado Nacional Argentino y la actora, contrato en el cual la demandada resulta ser, institucionalmente, un tercero ajeno a dicho acuerdo" (Cámara Federal de San Martín Sala II, ["Autopistas del Sol S.A. c/Municipalidad de Malvinas Argentinas s/Acción meramente declarativa"](#)).

Consecuentemente, aunque la ruta nacional atraviere el ejido municipal de Santa Ana y por ende la cabina de peaje se encuentre dentro del municipio; ello no justifica la el cobro de la tasa, toda vez que alteraría la ecuación económica de la concesión vial, prevista en el art. 1 de la ley 17.520.

Por todo lo expuesto, la pretensión tributaria municipal deviene incompatible dado que, no ha podido demostrar la existencia de servicios efectivamente prestados por la demandada, como así tampoco la jurisdicción municipal que pretender argumentar para justificar su cobro.

5) En conclusión, considero que corresponde hacer lugar a la demanda y declarar inaplicable a Caminos del Paraná S.A. la "Tasa de Registro, Inspección y Servicios de Contralor" por parte de la Municipalidad de Santa Ana con imposición de costas, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCN).

6) En relación a los honorarios y en virtud de lo expuesto en los párrafos anteriores, es preciso indicar que la causa carece de contenido económico a los fines regulatorios previstos por el art. 21 y cctes. de la ley 27.423.

Por ello, en virtud de las pautas del art. 16 inc. b), c) d) y e) de la referida Ley, teniendo en cuenta la labor desarrollada que comprendió:

-interposición de la demanda (fs. 5/25), respuesta a la contestación de la demanda e impugnación de la documental ofrecida por la demandada (fs. 80/81), solicitudes para la producción de la audiencia prevista por el art. 360 CPCCN (fs. 83 y 84), planteo de negligencia probatoria (fs. 104) a la cual se le hizo lugar (fs. 109) y los alegatos (fs. 119/126), entre otros aspectos.



Teniendo en cuenta a su vez, la naturaleza, complejidad de las cuestiones planteadas y del resultado obtenido, en virtud de lo que prevé el art. 48 de la Ley de honorarios, corresponde regular los honorarios de los representantes de Caminos del Paraná S.A. de manera conjunta en 20 UMA, mas el 40% por el doble carácter (art. 20 Ley de Honorarios).

Finalmente, no regular honorarios a los Dres. Iván Federico Lambert Navarro y Manuel Fernando Bilinski, en virtud del art. 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto;

FALLO:

1.- Hacer lugar a la demanda promovida por Caminos del Parana S.A. contra Municipalidad de Santa Ana y en consecuencia declarar inaplicable el cobro en concepto de “Tasa de Registro, Inspección y Servicios de Contralor”.

2.- Imponer las costas a la demandada vencida.

3.- Regular los honorarios de manera conjunta a los Dres Severo Augusto Gómez Belcastro, Sergio Javier López Pereyra, Mariano Guerrieri y Victoria Guerrieri, en 20 UMA mas el 40% por su doble carácter, que según el valor vigente (resol. SGA 1772/24 - \$57.016), equivale a la suma de Pesos un millón quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y ocho (\$1.596.448), más IVA en caso de corresponder.

4.- No regular los honorarios a los representantes de la Municipalidad de Santa Ana, Dres. Iván Federico Lambert Navarro y Manuel Fernando Bilinski, en virtud del art. 2 de la ley 27.423.

5.- Intimar al pago de los honorarios en el plazo de diez (10) días, desde que la presente quede firme (art. 54 ley 27.423).

Protocolícese. Notifíquese. Firme y cumplido, archívese.





Poder Judicial de la Nación

**JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONT.
ADM. DE POSADAS**

**Se notificó a los Dres. Belcastro, Guerrieri, Navarro, Bilinski y a la Fiscalía
Federal, segun las constancias del SGJ LEX 100.**

Se notifico al Dr. Lopez Pereyra en virtud del art. 133 CPCCN.

Signature Not Verified
Digitally signed by JOSE LUIS
CASALS
Date: 2024.08.27 11:57:51 ART



#35470798#421580776#20240827074639009